



FOTOGRAFÍA: INFORPRESS CENTROAMERICANA

## Golpistas se aferran al poder; aislamiento internacional aprieta

Mientras las naciones buscan una salida pacífica al golpe de Estado protagonizado por la derecha hondureña, el gobernante interino ha suspendido algunas garantías. Las implicaciones son serias.

Págs. 4-5

### EN ESTA EDICIÓN

#### GUATEMALA

08 CICIG avanza en casos Portillo y Matus

#### REGIÓN

10 Carencias en la integración regional empiezan a ser crónicas

#### PANAMÁ/BREVES

02 Martinelli asume como presidente

#### NICARAGUA/BREVES

02 Se suicida el alcalde de Managua

#### EL SALVADOR/BREVES

02 Corte Suprema de Justicia paralizada

#### REGIÓN/EMPRESARIAL

12 Países del istmo toman medidas por golpe de Estado en Honduras

#### GUATEMALA/EMPRESARIAL

12 Cambios en el Organismo Ejecutivo

[inforpress@inforpressca.com](mailto:inforpress@inforpressca.com)  
[www.inforpressca.com/inforpress](http://www.inforpressca.com/inforpress)

EN PROFUNDIDAD: HONDURAS

 ¿Cómo se está viviendo el golpe de Estado?

**Dirección para correspondencia internacional**

(reclamos y pagos de suscripciones):

**Inforpress Centroamericana**

Sección 23, P.O. Box 52-7270,

Miami, Fl.

USA 33152-7270

Dirección local:

**Inforpress Centroamericana**

Calle Mariscal 6-58, zona 11,

Ciudad de Guatemala

Telefax:

(502) 2473-1704,

2473-2231, 2473-2242

y 2473-2426

Equipo de Redacción

**Louisa Reynolds**

lreynolds@inforpressca.com

**Rochelle Olivares**

rolivares@inforpressca.com

**Marta Nocete**

mnocete@inforpressca.com

**Matthew Brooke**

mbrooke@inforpressca.com

**Asier Andrés**

aandres@inforpressca.com

Coeditores

**David Dubón**

ddubon@inforpressca.com

**Luis Solano**

lsolano@inforpressca.com

Editor

**Crosby Girón**

cgiron@inforpressca.com

Inforpress Centroamericana es un semanario que se edita todos los viernes salvo en las semanas de Semana Santa, Navidad y Año Nuevo. Copyright 2009 por Inforpress Centroamericana; todos los derechos reservados bajo los Convenios Panamericano e Internacional. Se prohíbe la reproducción de extractos mayores de 200 palabras en forma electrónica, eléctrica, química, mecánica, óptica, fotográfica o cualquier otra, sin el permiso escrito previo. Se repondrán ejemplares perdidos en el correo sin cobro alguno, siempre que se reciba aviso dentro de los tres meses posteriores a la fecha de publicación.

**PANAMÁ**

**Martinelli asume.** El 1 de julio, la toma de poder del empresario panameño se vio opacada por los eventos ocurridos recientemente en Honduras. Sin embargo, Martinelli ofreció aplicar su "experiencia empresarial" en sus funciones como mandatario. Conocido por ser el dueño de una de las cadenas de supermercados más grandes del país, Ricardo Martinelli declaró a la prensa que "desburocratizará el Estado", al que dará un modelo empresarial, muy a contrapelo de lo que se ha dado en llamar la "tendencia izquierdista" en Centroamérica. En los días recientes a su toma de posesión, se realizaron varias incautaciones de droga en el país: el 2 de julio el Servicio Nacional de Fronteras decomisó 650 kilos de cocaína. El decomiso ocurre luego de que el 29 de junio se capturara a tres personas con un cargamento de 1,013 kilos de cocaína.

**GUATEMALA**

**Archivo de la Policía Nacional (PN) pasa al Ministerio de Cultura.** El Archivo de la extinta PN, pasará a manos del Ministerio de Cultura, dieron a conocer esta semana autoridades del gobierno. En conferencia de prensa, el presidente Álvaro Colom, dijo que el Archivo, hasta ahora en manos de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), será administrado por el Archivo General de Centroamérica, al tiempo que garantizó el acceso al citado archivo policial. El traslado sucede luego de que información filtrada a la prensa, diera cuenta de diversos problemas a lo interno de la PDH, relacionados con el manejo del archivo. Se denunció además que el procurador, Sergio Morales, habría censurado su informe titulado "El derecho a saber". Según esta información, aspectos como violaciones ocurridas durante la guerra interna y la subordinación de la PN ante el Ejército y el papel de EEUU, habrían sido ocultadas por Morales. Organizaciones sociales están exigiendo la publicación íntegra del informe.

**NICARAGUA**

**Se suicida el alcalde de Managua.** La bala atravesó el pulmón y el corazón acabando con la vida Alexis Argüello Bohórquez, alcalde de Managua desde comienzos del año. Los últimos reportes del Instituto Forense confirmaron que, en efecto, la muerte de Argüello fue, sin lugar a dudas, un suicidio. El ex boxeador, triple campeón mundial en los años 70, acababa de volver de un homenaje a su carrera deportiva organizado en Puerto Rico y, según manifestaron personas que le recibieron en la isla, su estado de ánimo era bueno. Sin embargo, allegados al alcalde por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), declararon que en los últimos días se había sumido en la depresión. En un país que sigue con pasión el béisbol y el boxeo, por encima de cualquier otro deporte, Argüello era todo un ídolo de masas. Precisamente por ello los políticos trataron de acercarse a él a lo largo de su vida. Primero fue Anastasio Somoza Debayle el que trató de capitalizar el éxito del campeón y posteriormente Daniel Ortega, que, personalmente impulsó su ascenso a la municipalidad de Managua. Su aproximación al FSLN se produjo a través de uno de los empresarios sandinistas con mayor relevancia en la actualidad, Francisco López Centeno, presidente de la petrolera estatal Petronic. López Centeno financia un grupo religioso, el Hogar de Rehabilitación del Adicto, al que acudió Argüello para recuperarse de su alcoholismo. Y fue la amistad forjada a través de este vínculo la que procuró su ascenso a la élite del FSLN. Dado que el fallecido fue expropiado por la Revolución, su presencia entre los sandinistas fue muy útil para el discurso de Ortega y su esposa ya que fue presentado en numerosas ocasiones como el vivo ejemplo de la reconciliación nacional a la que constantemente hacen referencia.

**EL SALVADOR**

**Corte Suprema paralizada.** La Corte Suprema de Justicia se encuentra en caos administrativo y judicial debido a la salida de cinco magistrados que finalizaron su periodo el 30 de junio. Se trata de un magistrado de la sala de lo Civil, tres de la sala Constitucional y el propio presidente de la sala de lo Constitucional y la Corte Suprema de Justicia. La justicia no se imparte en ninguna de las dos salas y no hay quien firme compromisos administrativos y las plenarios están suspendidas a causa de la ausencia del presidente. Los magistrados que han quedado en las salas abogan por una reorganización que asigne un presidente en funciones que desbloquee algunos trámites mientras los dos principales partidos, FMLN y ARENA finalizan las negociaciones para completar la lista de magistrados.

*Pago de suscripciones en Guatemala solamente por mensajero o correo certificado*

Bloqueos de países vecinos, “pausas” en créditos internacionales, Estados Unidos interrumpe ayuda militar y la Unión Europea retira a sus embajadores

# Golpistas se aferran al poder; aislamiento internacional aprieta

*El pulso al que el gobierno golpista apostó contra la comunidad internacional ante las intensas presiones que respaldan el retorno del gobernante depuesto de Manuel Zelaya, ocurre en un escenario donde el gobernante interino, Roberto Micheletti, ha quedado sumido en una complicada situación de aislamiento internacional. Sin el reconocimiento de casi ningún país, el gobierno de facto se está apoyando en fuerzas políticas, el aparato institucional del Estado y en las élites empresariales internas para legitimar su gobierno, y de esa manera revertir las resoluciones de distintas instancias regionales, como la de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que amenaza con la suspensión del país. Acorralado por los regímenes centroamericanos, el gobierno de Micheletti permanecía desafiante pero obligado al mismo tiempo a maniobrar ante las presiones, pero también se le impone la tarea de entablar intensas negociaciones con Estados Unidos, país del cual depende, en gran parte, el futuro de Zelaya y Micheletti.*

POR LUIS SOLANO

El gobierno de **Roberto Micheletti** estaba a la espera de la anunciada llegada a Honduras de una comisión de la **OEA**, prevista para el viernes 3 de julio, con el propósito de evaluar la situación interna, en preparación para la reunión extraordinaria del organismo que se llevaría a cabo el día después, en Washington. En esta última el organismo adoptaría las medidas necesarias en caso el gobierno interino **Micheletti**, no aceptara la resolución de la **OEA** que esta semana estableció que daba un plazo de 72 horas para el restablecimiento del gobierno de **Zelaya**, el cual vencía el sábado 4 de julio, fecha en que **Zelaya**, al único que reconoce dicho foro, tiene programado su retorno a Honduras (ver recuadro).

Ante esa visita, el régimen de **Micheletti** se preparaba para entablar un diálogo con los miembros de la Comisión, entre los que estarían el secretario general de la **OEA**, **José Miguel Insulza**, y varios ministros de Relaciones Exteriores de Latinoamérica.

Sin embargo, **Albert Ramdin**,

asistente del secretario general, declaró que la Comisión está buscando el “incondicional” retorno del mandatario depuesto. **Ramdin** fue enfático al decir que la misión “no discutirá concesiones” porque quiere el regreso de Zelaya a Honduras bajo “circunstancias seguras y sin condiciones” (AP, 2/7/09).

El revés para los golpistas fue secundado por **Insulza**, quien además agregó que “No vamos a negociar...queremos ver el retorno del presidente Zelaya en circunstancias seguras y sin condiciones...Después de eso, ellos pueden discutir a través del diálogo cualquier diferencia que haya internamente.”

**Insulza** dejó entrever que no habrá pláticas con miembros del gobierno interino, sino que éstas se establecerán con diversas fuerzas políticas. De lo contrario, se supone, platicar con el propio **Micheletti** implicaría que la **OEA** le otorgara legitimidad al movimiento golpista, algo que el organismo teme que pueda ocurrir. Para evitarlo, **Insulza** ya ha entablado conversaciones vía telefónica con ex presidentes hondureños y líderes religiosos para promover pro-

puestas que superen el conflicto político. Por ahora, sólo el Comisionado de Derechos Humanos, **Ramón Custodio**, es el único que se ha pronunciado proponiendo realizar una consulta sobre la reinstauración de **Zelaya**, como una eventual salida. “Que se someta a consideración del pueblo hondureño, mediante plebiscito... la restitución de su cargo al ciudadano **José Manuel Zelaya Rosales**, mediante la simple pregunta de Sí o NO”, dijo **Custodio** (Reuters, 2/7/09).

Ante la posición de la **OEA**, de gobiernos regionales y del aislamiento internacional en que cayó el gobierno interino, éste se mostró aún más desafiante. El nuevo canciller hondureño, **Enrique Ortez Colindres**, declaró que el gobierno de **Micheletti** “no precisa de reconocimiento internacional” e insistió en que en Honduras “no hubo un golpe de Estado” y en que la destitución del mandatario **Manuel Zelaya** obedeció a su “desacato a las órdenes constitucionales”. **Ortez Colindres** agregó que “Micheletti es el presidente y no estamos esperando a que vengan a reconocerlo”, pues “el pueblo hondureño ya lo escogió”. Según el ministro, Micheletti “es el presidente de Honduras con o sin la Organización de Estados Americanos (OEA)”.

Ante ello, es inminente que Honduras será sujeta de sanciones. **Insulza** dio a conocer que en su visita a Honduras haría todo lo que pudiese “Pero creo que será muy difícil cambiar las cosas en un par de días. No vamos a Honduras a negociar. Vamos a Honduras a pedirles que cambien lo que han hecho. La comunidad internacional ha hecho prácticamente todo lo que se puede hacer para persuadir a los líderes interinos a que abandonen el poder y restituyan al

depuesto presidente Manuel Zelaya.”

El nuevo canciller puso el dedo en la llaga, sobre las verdaderas razones del golpe de Estado, al declarar que **Zelaya** se había “rodeado de un grupo de comunistas” y que había convertido a Honduras en un país “con una dependencia total de los petrodólares” que supuestamente recibió del Gobierno del presidente venezolano, **Hugo Chávez**. (Efe, 2/7/09).

### **Chávez, el meollo del asunto**

Mientras se observa lo casi lejano que se encuentra una salida negociada para el retorno de **Zelaya**, que depende principalmente de la dinámica que adopten los sectores populares que se oponen al golpe, y de las presiones internacionales, la causa fundamental del golpe parece descansar en el viraje a la izquierda de **Zelaya**, y su alianza con el mandatario venezolano, **Hugo Chávez**, lo cual fue el factor fundamental que irritó a las élites conservadoras y que desencadenó la asonada.

“La intervención de Chávez es clara y definida” en la crisis de Honduras, declaró **Micheletti**, quien también cuenta con el apoyo de las élites conservadoras centroamericanas que ven en **Chávez** al enemigo a vencer.

Los señalamientos de **Micheletti** contra **Chávez** fueron respaldados por el influyente y conservador diario estadounidense *The Wall Street Journal* (1/7/09), medio que en general apoya las ideas de las élites empresariales centroamericanas. En su editorial expresa apoyo al golpe de Estado al cual considera “extrañamente democrático”, aunque advierte que el presidente **Barack Obama**, podría terminar convalidando la intervención chavista en Centroamérica si permite la victoria del “chavismo” en Honduras, y debe tomar en cuenta que la destitución de **Zelaya** se hizo por orden de la Corte Suprema, afirma el editorial.

Tanto la posición del gobernante interino como el del editorial, también son una respuesta a la

posición adoptada por los países que conforman la Alianza Bolivariana para las Américas (**ALBA**)\* construida y encabezada por el gobierno de **Chávez**. **ALBA**, que decidió no reconocer al gobierno golpista, también retiró a todos

na, el comercio terrestre durante 48 horas, también como medida de presión para que **Zelaya** fuera restituido en el cargo.

En general, tanto la **ALBA**, como el **SICA** y el Grupo del Río reafirmaron que reconocen como únicos representantes diplomáticos de Honduras en sus países al personal designado por **Zelaya** y condenaron enérgicamente el “golpe de Estado” porque manda un mensaje negativo a las naciones latinoamericanas y del Caribe.

---

**“No vamos a negociar... queremos ver el retorno del presidente Zelaya en circunstancias seguras y sin condiciones... Después de eso, ellos pueden discutir a través del diálogo cualquier diferencia que haya internamente”**

**José Miguel Insulza**

### **La ONU también presiona**

A la posición de liderazgo adoptada

por la **OEA** para revertir el golpe de Estado, se sumaron las decisiones de organismos financieros como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo de poner una “pausa” a la entrega de nuevos créditos. Y sumado a la fuerte postura de la Organización de Naciones Unidas (**ONU**), que pidió el inmediato regreso de **Zelaya**, pone a Honduras contra la pared, país que es altamente dependiente de la comunidad internacional.

La Asamblea General de la **ONU** instó a todos los países a no reconocer al gobierno de **Micheletti**, en una resolución aprobada el 30 de junio por unanimidad, en la que también pide la “inmediata e incondicional” restitución de **Zelaya** como presidente “legítimo y constitucional” de Honduras “para que cumpla el mandato para el que fue elegido por el pueblo”. La resolución condena “el golpe de Estado... que ha interrumpido el orden constitucional y democrático, así como el ejercicio legítimo del poder”.

Asimismo, instan a “todos los países a que no reconozcan otro Gobierno que no sea el constitucional” de **Zelaya**, además de expresar su firme apoyo a los esfuerzos hechos de acuerdo al capítulo VIII de la carta de Naciones Unidas, que llama a la resolución pacífica de los conflictos.

La resolución fue presentada por Antigua y Barbuda, Bolivia, Cuba, República Dominicana, Ecuador,

sus embajadores de Honduras.

La postura de **ALBA** también fue acompañada por otras instancias regionales: el Grupo de Río\*\* por ejemplo, acordó crear una comisión de representantes presidenciales para investigar crímenes y violaciones a los derechos humanos por parte de los golpistas y pidieron a la Asamblea General de la **OEA** adoptar soluciones “drásticas”. También acordó aislar política, diplomática y comercialmente al nuevo gobierno. Lo mismo hizo el Sistema de Integración Centroamericana (**SICA**\*\*\*, en reunión sostenida en Nicaragua esta semana, países que ordenaron al Banco Centroamericano de Integración Económica (**BCIE**) suspender sus préstamos y desembolsos al gobierno de **Micheletti**.

Además, el **SICA** acordó suspender sus reuniones políticas, comerciales, diplomáticas o de cualquier otra índole con funcionarios del gobierno “golpista” de Honduras y, asimismo, reconocer en las reuniones de los organismos de la integración a los funcionarios nombrados por **Zelaya**.

Los mandatarios centroamericanos demandaron al Consejo de Seguridad de la **ONU** convocar a una reunión urgente para analizar la situación de Honduras y adoptar las “medidas coercitivas” que sean necesarias para superar la crisis en ese país. En tanto, el CA-4, integrado por El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, acordó cerrar en esta sema-

El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Venezuela.

## ¿Y Estados Unidos?

La costumbre histórica del papel jugado por el gobierno de Estados Unidos en los golpes de Estado en Latinoamérica, fue una de las primeras preguntas hechas en relación con su participación en lo acontecido en Honduras el 28 de junio.

El gobernante **Barack Obama** fue contundente, cuando a mediados de semana, declaró que el golpe en Honduras fue “ilegal” y **Zelaya** sigue siendo el líder legítimo. Aseguró que “sería un terrible precedente si permitiéramos que este golpe de Estado tuviera éxito”. Latinoamérica ha registrado “enormes progresos” y no queremos un retorno a los “tiempos oscuros”, indicó.

Sus declaraciones se dan en el marco de la suspensión de la ayuda militar a Honduras decidida por el Pentágono, del cual son socios importantes los militares golpistas. Esto ha llevado a la pregunta de cuál era el papel de Estados Unidos previo al golpe, del cual se sabe tuvieron conocimiento que se estaba gestando, y los movimientos post golpe que hará en lo sucesivo.

De acuerdo con un análisis del diario mexicano *El Universal* (1/7/09), “en las horas previas a la insurrección golpista, funcionarios del Departamento de Estado mantuvieron intensos contactos con altos cargos del gobierno, de las instituciones y del Ejército de Honduras a través de su embajada en Tegucigalpa para tratar de evitar un desenlace que hoy mismo enfrenta a Estados Unidos al difícil dilema de defender a un hombre con el que no coincidía políticamente —lo que quizá infundió ánimos golpistas a la cúpula militar de Honduras—, pero al que nunca deseó ver derrocado por un golpe militar.”

Agrega el diario que “Por eso el presidente Barack Obama ha decidido sumarse al consenso de América Latina de condenar el golpe y reconocer a Manuel Zelaya como el presidente legítimo”, según **Peter Hakim**, presidente de Diálogo Interamericano, “al tratar de explicar las aparentes contradicciones o ambigüedades en las que ha incurrido el gobierno de Esta-

## I. El texto de la resolución de la OEA en Honduras

1. Condenar enérgicamente el golpe de Estado en contra del Gobierno constitucional de Honduras y la detención arbitraria y expulsión del país del presidente constitucional **José Manuel Zelaya Rosales** que produjo la alteración inconstitucional del orden democrático.

2. Reafirmar que el presidente **José Manuel Zelaya Rosales** es el presidente constitucional de Honduras y exigir la restauración inmediata, segura e incondicional del Presidente a sus funciones constitucionales.

3. Declarar que no se reconocerá ningún Gobierno que surja de esta ruptura inconstitucional y reafirmar que los representantes designados por el Gobierno constitucional y legítimo del presidente de **José Manuel Zelaya Rosales** son los representantes del Estado de Honduras ante la Organización de los Estados Americanos.

4. Instruir al Secretario General para que, junto a representantes de varios países, realice las gestiones diplomáticas dirigidas a restaurar la democracia y el Estado de derecho, y la restitución del presidente **José Manuel Zelaya Rosales**, según lo previsto en el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana, y reportar a la Asamblea General Extraordinaria sobre los resultados de las iniciativas. De no prosperar estas iniciativas en un plazo de 72 horas, la Asamblea General Extraordinaria aplicará inmediatamente el artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana para suspender a Honduras.

5. Prorrogar este período extraordinario de sesiones hasta el 6 de julio de 2009.

dos Unidos a la hora de condenar el golpe de Estado en Honduras.” Según **Hakim**, “Para nadie era un secreto, desde la pasada cumbre de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en Honduras, que el Departamento de Estado no sentía un gran entusiasmo y hasta estaba molesto por algunas de las actitudes y posiciones del presidente Zelaya...Pero eso no quiere decir que haya estado en favor de un golpe”, sentenció.

Finalmente, otro artículo analiza el papel que para Estados Unidos juega la base militar Soto Cano (Palmerola) en el contexto del golpe, y del reconocimiento de **Zelaya** como gobernante (*Rebelión*, 2/7/09). Afirma el análisis que “Washington ha admitido que tenía conocimiento previo del golpe...desde hacía más de una semana. En declaraciones a la prensa... dos voceros del Departamento de

Estado comentaron que su embajador y un equipo de la diplomacia estadounidense ‘estaban en conversaciones’ con los actores principales del golpe desde hace un mes. Esas ‘conversaciones’ se intensificaron durante la semana pasada, cuando el embajador estadounidense en Tegucigalpa, **Hugo Lorens**, se reunió tres veces con los militares golpistas y los grupos civiles para tratar de buscar otra salida.”

Estados Unidos se enfrenta ahora al reto de las implicaciones al calificar los hechos como un golpe de Estado, lo que le obligaría a romper las relaciones diplomáticas y a suspender la mayoría del apoyo económico y militar al país.

Además, asegura el análisis que “Washington no quiere arriesgarse al cierre de su base militar en Soto Cano y a la expulsión de sus 600 efectivos militares.”

\*Los países miembros son: Antigua y Barbuda, Bolivia, Cuba, Dominica, Ecuador, Honduras, Nicaragua, San Vicente y Las Granadinas y Venezuela.

\*\*Está integrado por Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guayana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela.

\*\*\* Conformado por Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y la República Dominicana.

Concentración en la propiedad de los medios de comunicación se hace sentir

# ¿Cómo se ha vivido el golpe de Estado en Honduras?

El poder Judicial argumentó que el Ejército actuó en su servicio, mientras la misma noche del golpe el Congreso votó casi unánimemente para aceptar una supuesta “renuncia” del presidente **Manuel Zelaya**, y además reemplazarlo por el presidente del Congreso, **Roberto Micheletti**, también del Partido Liberal. Hasta el comisionado nacional de los Derechos Humanos, **Ramón Custodio**, un famoso oponente a los excesos del Ejército durante los años 80, dio su respaldo a los militares. **Custodio** declaró el mismo domingo que **Zelaya** mereció ser destituido porque era “autoritario”, y agregó que “los militares han devuelto el poder al poder civil, como debe ser”.

Ese día **Micheletti** entre otros empezaron a argumentar que “no era un golpe, porque la Constitución sigue vigente”. Y el día después, los titulares de los periódicos no proclamaban el “Golpe de Estado” y las fotos no fueron de tropas encapuchadas, ni del presidente en pijama, en el aeropuerto en Costa Rica. Eran de **Micheletti** con una mano sobre la Constitución y la otra en el aire. “R. Micheletti sucede a ‘Mel’”, tituló el periódico capitalino *La Tribuna*.

El golpe se llevó a cabo el mismo día que se iba a convocar una “encuesta” que, efectivamente hubiese preguntado a la población si estaban a favor de reformar la Constitución. En otras palabras, el presidente y su intención de reformar la constitución inspiraron tanto rencor, que tanto la clase política, como el poder económico -que en gran medida domina a los gobernantes-, optaron por romper con 27 años de alternabilidad. Esta élite, que **Zelaya** llamó “los grupos de poder”, argumenta, con razón, que el Poder Judicial determinó que convocar la encuesta era ilegal. Se advirtió, también con razón, que **Zelaya** insinuaba que quería reformar la Constitución para permitir la reelección de ex presidentes, una cosa que dicho documento específicamente prohíbe. Y se especuló con que **Zelaya** iba a convocar una asamblea constituyente antes de las elecciones generales, no después como él había declarado en público para luego disolver el Congreso, y, de una manera u otra, aferrarse al poder más allá de su mandato constitucional.

Por otro lado, las fuerzas que apoyan a **Zelaya** - sindicatos, organizaciones campesinas, y grupos de Derechos Humanos - insisten en que la élite del país no se preocupó tanto por el Estado de la Ley, sino por perder su control sobre el gobierno la economía.

Ambas posiciones – a favor del golpe y el nuevo gobierno o en contra del golpe y en apoyo a **Zelaya** - han atraído

*No se puede negar que fue un golpe inusual. Entre 100 y 300 efectivos encapuchados entraron a la residencia del presidente, lo sacan y le ponen en un avión. Pero los militares no asumieron el poder, como habían hecho en el último golpe de Estado en Honduras. Ocurrido en 1972, en aquel tiempo el Ejército quitó un presidente democráticamente electo y no soltó control del gobierno durante una década. En la actualidad, sin embargo, los tres poderes del gobierno no fueron disueltos. De hecho, dos de las tres ramas – el poder Judicial y el Congreso - alabaron el comportamiento de los militares. Mientras tanto, organismos de derechos humanos han arremetido contra las medidas de represión del nuevo gobierno de Micheletti, que ha suspendido algunas garantías constitucionales como la libertad de asociación y reunión, y el derecho a la libre circulación durante el toque de queda que en principio concluye este viernes*

POR MATTHEW BROOKE

do apoyo masivo, demostrado por las multitudinarias manifestaciones que ambos bandos han logrado en convocar esta semana. No obstante, sólo los favorables a los “golpistas” han recibido amplia cobertura en la prensa. Por ejemplo, la protesta a favor del nuevo gobierno del 30 de junio, dos días después del golpe, ocupó la portada y las primeras 10 páginas del diario capitalino *El Heraldo*. La protesta en contra del golpe que ocurrió el día anterior, recibió sólo dos páginas, y se refirió a la protesta, que atrajo varios miles de personas, como una “turba”.

Por el momento, hay pocos hondureños que se pronuncien en contra del proyecto de **Zelaya** y también del golpe. Al menos no en público.

## El rol de la prensa

Se constató la clausura total o temporal de emisoras, como *Radio Globo*, el *Canal 66*, *Maya TV*, el *Canal 11* y *Radio Progreso*, según la Federación Internacional de Periodistas. Además se desconoce el paradero de varios ministros del gobierno de **Zelaya**, aunque se supone que se están escondiendo.

Los hechos que en último término desencadenaron el golpe ocurrieron la semana pasada. El 23 de junio, **Zelaya** destituyó al jefe del Estado Mayor Conjunto de las tres armas del Ejército, el general **Romeo Vásquez**, cuando el militar informó al presidente que no podía trasladar las urnas para la encuesta, porque el poder Judicial se lo había prohibido. En protesta, también renunció el ministro de Defensa, **Edmundo Orellana**.

Pero esto fue sólo el último acontecimiento después de varios años de conflictos con las otras ramas del gobierno, los medios de comunicación, y “los grupos de poder”. El escenario se calentó a mediados de 2008, cuando **Zelaya** empezó a hablar de que Honduras podría adherirse al **ALBA**, el proyecto del bloque izquierdista de América Latina, liderado por Venezuela. Desde las celebraciones para la adhesión a tal bloque en Tegucigalpa en agosto 2008, **Zelaya** ha contado con el apoyo de movimientos sociales. No obstante, medios de comunicación como *El Heraldo* ha insistido que esta lealtad fue en gran medida comprada con los fondos discrecionales del Ejecutivo.

En noviembre, **Zelaya** empezó a hablar de sus planes sobre “la cuarta urna”, que se iba a colocar en las elecciones generales en noviembre 2009. Si recibiese un voto mayormente positivo, se hubiese convocado una Asamblea Constituyente. Pero más que nada, la propuesta se vio como algo irrelevante. Las encuestas demostraron que la

popularidad del presidente habían llegado a su punto más bajo. La crisis económica se estaba endureciendo, y los medios de comunicación no cejaron en recordar al pueblo hondureño quién estaba en el poder. Parecía imposible que un referéndum propuesto por el gobierno del **Zelaya** pudiese prosperar.

Pero dos meses después, cuando la administración de **Zelaya** empezó a cabildear agresivamente por la “cuarta urna”, el escenario ya era muy diferente. A través de varias medidas – entre ellos un incremento del salario mínimo de más del 60% – el presidente había conseguido un repunte considerable de su popularidad.

Un factor importante para esta recuperación fueron los medios de comunicación que el gobierno controlaba. Anteriormente, **Zelaya** había creado dos medios – el *Canal 8* en la televisión y el periódico semanal *Poder Ciudadano* – y fortalecido un canal de radio ya existente. Varios analistas explicaron a *Inforpress* los rasgos de la ofensiva mediática que el gobierno lanzó. Por ejemplo, **Zelaya** usaba el canal de televisión del gobierno en una forma similar a **Hugo Chávez** en Venezuela, para comunicarse directamente con la población y superar la oposición casi unánime a su figura en los medios de comunicación privados.

**Jhonny Rodas**, el editor del periódico alternativo *El Libertador*, afirmó que **Zelaya** “es una persona muy espontánea. Un día se monta en un avión de bomberos de la Fuerza Aérea y él lo maneja, una media noche aparece en el canal del Estado cantando música de trova con un cantautor hondureño en el Río Plátano en la Moskitia, luego se mete en medio de los *Tigres del Norte* cantando. Y éste es nuestro pueblo. Tal vez el hondureño de la ciudad lo ve ridículo a **Zelaya**. Pero el hondureño del campo no. El presidente se parece al pueblo”.

De forma rápida, el apoyo para una reforma constitucional se disparó. La destacada periodista **Thelma Mejía** informó que ha tenido acceso a encuestas privadas que demostraron que en un punto determinado la reforma llegó a tener el apoyo de encima del 70% de la población.

No obstante, la oposición ya comenzaba a unirse, liderada, en gran parte, por **Roberto Micheletti**. Para mostrar el apoyo que la cuarta urna tenía, en marzo, **Zelaya** propuso una “consulta popular”, que de recibir un voto mayoritariamente por el “Sí”, hubiese obligado al Congreso a aprobar una ley para colocar la “cuarta urna”. No obstante, en mayo, el Poder Judicial determinó que esta consulta era ilegal; el Ejecutivo propuso en su lugar “una encuesta” no vinculante, pero también fue declarada ilegal. La gran pregunta que surgió entonces era si las Fuerzas Armadas apoyarían a la rama judicial y el Congreso o al Ejecutivo. La respuesta es bien conocida.

Diversas fuentes tienen diferentes opiniones sobre las razones de por qué se llevó a cabo el golpe. Hay un consenso, sin embargo, en que, sobre todo, los complotistas temieron el porvenir. Según **German Leitzelar**, abogado que ahora tendría un cargo en el gobierno de facto de **Micheletti**, “la clase política se la jugó, al decidir en aguantar seis meses en una crisis internacional (en lugar de) aguantar veinte años con un proyecto que se estaba planteando”.

Las propuestas para la Asamblea Constituyente siempre fueron ambiguas, y diferentes fuentes identificaron varios elementos de ella que atemorizaron a los “grupos de poder”.

**Jari Dixon**, el fiscal del Ministerio Público cuyo despedido desencadenó una huelga de hambre liderada por él mismo y otros tres otros fiscales en 2008, opinó que el elemento clave fue la propuesta de una Constitución más participativa. “En vez de un sistema representativo, se convertiría en un sistema participativo, en que cada decisión del gobierno, sería una consulta a nivel nacional. Aquí, donde una élite pequeña está acostumbrada a controlar todo, esto es pecado.”

“**Zelaya**, en gran parte, es responsable de su propia caída”, afirmó **Manuel Torres Calderón**. Agregó que, “mi opinión es que el golpe no se le ha dado por lo que hace,

sino por lo que dice. Su discurso se fue radicalizando. Existió la expectativa de que su proyecto, al estarse realizando, encontraría en el movimiento popular una radicalidad, que no les pareció correcto (a las élites). Porque en la práctica yo no encuentro ninguna decisión que haya desafiado los intereses de poder. El asumió el discurso de **Chávez**, pero nunca los hechos de **Chávez**.”

La periodista **Thelma Mejía Zelaya** destaca el hecho que el presidente “hablaba de nacionalizar empresas, y el ministro de la Presidencia incluso hablaba de nacionalizar medios de comunicación.”

**Mejía** también subrayó que el ascenso de la confrontación perjudicó el apoyo con que la reforma constitucional una vez gozaba. En su opinión, algunas encuestas privadas mostraron que la popularidad de la propuesta había caído un 30%, hasta llegar al 40%.

### Prohibido desafiar a las élites

Un golpe avalado por las Cortes y el Congreso parece como algo que nunca tendría que pasar. ¿Si se controla todo el sistema, por qué no enjuiciar al presidente? ¿Cuál es el punto en arriesgar las relaciones diplomáticas con los países que en gran medida sostienen el país?

**Manuel Torres Calderón** respondió que “(Las mismas élites) cerraron las salidas. Pudieron haber hecho un juicio político, pudieron haber hecho un juicio legal. Pero el Estado de derecho está roto, lo han violentado tantas veces que no hay credibilidad por ninguna de las partes”.

Frente a la falta de credibilidad, un juicio se hubiera convertido en un espectáculo político. **Jhonny Rodas** argumentó que “los grupos de poder se dieron cuenta que a la hora de llevar a **Zelaya** a un tribunal, sencillamente, no contaba sólo con dominar a los jueces. Saben que el pueblo está detrás del presidente”.

No obstante si **Zelaya** regresa al poder, y a pesar de sus fallos, **Torres Calderón** cree que su legado será parcialmente positivo. “Creo que es un político que advirtió de la necesidad de un cambio en la sociedad hondureña. Y advirtió además de que los partidos mayoritarios estaban en crisis en relación a este cambio. Estaba enfrente de un desgaste profundo. Luego **Zelaya** no tenía una idea de cómo hacer este cambio, y fue cuando encontró el discurso de **Chávez**.”

De forma similar, **Thelma Mejía** comentó que “**Zelaya** logró revivir las esperanzas en un pueblo que en el fondo quiere cambios. Y las élites conservadoras deben entenderlo.”

Sin embargo, estos analistas advierten que el futuro se ve nublado, por lo menos para los próximos meses. **Micheletti** es conocido por ser un político agresivo y corrupto, especialmente por su conducta durante la huelga de hambre de los fiscales durante 2009, cuando intentó dañar su imagen. Según **Luis Javier Santos**, uno de los fiscales que luego sufrió un atentado y quedó paralizado, **Micheletti** efectivamente intentó sobornar a los abogados, para que dejasen de manifestarse.

**Manuel Torres Calderón** comentó que “podrían decir que colocaron a **Micheletti**, porque él al ser el presidente del Congreso, era el segundo en la línea de sucesión y no lo podían evitar. Pero ellos no han dicho eso. Ellos han dicho que están de acuerdo en que sea el presidente. Ésta es la peor carta que podían sacar para resolver la crisis.” El nuevo canciller, **Enrique Ortez Colindres**, también parece ser un hombre de poco tacto. Uno de sus primeros actos fue salir en televisión refiriéndose a **Obama** como “un negrito”.

Y además, la militarización. **Marvin Ponce** del partido izquierdista Unificación Democrática contó a la agencia *IPS* que “muchas de nuestras protestas pacíficas han sido reprimidas por efectivos del Ejército, pero eso no trasciende. Ayer pincharon las llantas de varios autobuses que se trasladaban a protestar en la capital, procedentes de Olancho (en el nororiente) y hasta ahora nuestros registros contabilizan más de 140 personas detenidas”.

Analistas consideran imprescindible creación de unidad de investigación criminal

# CICIG avanza en casos Portillo y Matus

*La Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH) y la Comisión contra la Impunidad (CICIG) han seguido, en cierta forma, caminos paralelos. La CEH comenzó a operar en medio de las críticas de la derecha y la desconfianza de algunos sectores de izquierda y terminó sorprendiendo a todos con un informe demoledor. La CICIG a su llegada al país también encontró un escenario adverso y durante meses poco se supo de su trabajo. Sin embargo, al igual que ocurrió con la CEH, la entidad que dirige Carlos Castresana ya ha comenzado a destaparse. Tras haber ganado legitimidad a raíz del caso Rosenberg, la CICIG se ha dispuesto a depurar el MP y a retomar el caso Portillo. Dada la actual situación, con Salvador Gándara al frente del Ministerio de Gobernación y Marlene Blanco fuera de la PNC, ¿Podrá la CICIG cumplir con sus objetivos?*

POR ASIER ANDRÉS

El rumor se difundió a toda velocidad por las oficinas del Ministerio Público (MP) la mañana del 19 de junio: la CICIG, supuestamente, había solicitado la detención de al menos una veintena de trabajadores de la institución. De inmediato, los funcionarios agrupados en el sindicato del MP se movilizaron para protestar por lo que consideraban un atropello a la independencia judicial. Finalmente, los empleados a los que la CICIG acusaba fueron muchos menos, pero, sin duda, las protestas fueron el reflejo del malestar que la acción del director de la comisión internacional, **Carlos Castresana**, está generando a lo interno del MP.

Solamente dos fueron los trabajadores señalados por la CICIG, **Dennis Herrera Arita** y **Carlos Gabriel Rodríguez Serrano**. Ambos son auxiliares de la Fiscalía de Delitos contra la Vida y fueron vinculados al caso que ha emprendido la Comisión contra su antiguo jefe, **Alvaro Matus**, sospechoso de obstruir la investigación del asesinato de **Víctor Rivera**, el venezolano que fuera asesor del Ministerio de Gobernación. De acuerdo con la jueza que dirige el proceso, **Marta Sierra de Stalling**, **Herrera Arita** fue uno de los auxiliares del MP que participaron en el registro de las oficinas de **Rivera** después de su muerte, que concluyó sin que se llevaran ninguna prueba. **Rodríguez Serrano**, por su parte, habría sido el encargado de trasladar a la única testigo del caso, la secretaria del asesor, **María del Rosario Melgar**, hasta el aeropuerto para que saliese del país sin prestar declaración ante un juez.

La reacción que se vivió en el MP no fue producto exclusivo de la inculpación de estas dos personas. Un día antes, otros dos ex subalternos de **Alvaro Matus** también fueron llamados ante el juez por colaborar en la obstrucción del caso **Rivera**. Se trata de dos ex funcionarios

de la Oficina de Protección de Testigos —**Leyla Lemus Arriaga** y **Pedro Girón Polanco**— que ya no laboraban para la institución pero que, presuntamente, se habrían encargado de sacar a la testigo **Melgar** del país.

Pero mientras los fiscales protestaban y salían en defensa de sus compañeros, **Castresana** también movía sus piezas. El mismo 19 de junio, el comisionado acudía a Nueva York, a la sede de las Naciones Unidas, donde obtuvo el apoyo del secretario general de la organización **Ban Ki-moon** para su trabajo.

Las palabras del secretario fueron estrictamente las esperadas para un funcionario de la ONU, se limitó a “pedir respeto al mandato y la independencia” de la CICIG, pero el acto sirvió para enviar un claro mensaje al país: **Castresana** cuenta con respaldo al más alto nivel en la Comunidad Internacional.

## Militares bajo la lupa

Esta demostración de fuerza por parte del magistrado español allanó el camino para lo que vendría después. Si primero se habían dedicado a estrechar el cerco sobre **Matus** y el MP, los siguientes en centrar la atención de la CICIG serían el entorno de **Alfonso Portillo** y el tribunal que lleva el caso del desfalco de Q 120 millones (US\$ 15 millones) del que se acusa al ex presidente.

El 25 de junio, el ex ministro de la Defensa durante la administración “portillista”, **Eduardo Arévalo Lacs**, fue detenido acusado de participar en la desaparición de esos Q 120 millones. Al militar, que pertenece a la promoción del 73, al igual que **Otto Pérez**; la jueza **Marta Sierra de Stalling**, la misma que lleva el caso **Matus**, le impuso una fianza de Q 40 millones. También se emitió una orden de captura contra los ex militares **Napoleón Rojas Méndez** y **Jacobo Salán Sánchez**, sin embargo no pudieron ser localizados y son en la actualidad prófugos de la Justicia. Estos dos antiguos oficiales de inteligencia

comparten currículos paralelos; ambos fueron miembros de la D-2, fueron expulsados de las Fuerzas Armadas en 1996 por su vinculación con la “Red Moreno” (ver más adelante), y los dos acabaron siendo asesores de seguridad de **Alfonso Portillo**.

Estas acciones son la prolongación de las que emprendió el MP a finales de marzo cuando fueron detenidos otros tres militares vinculados con el desfalco de Q 120 millones en el Ministerio de la Defensa; entre ellos **Enrique Ríos Sosa**. Desde entonces, el hijo de **Efraín Ríos Montt**, permaneció en arresto domiciliario.

Días antes de la detención de **Arévalo Lacs**, la CICIG consiguió ser aceptada definitivamente como querellante adhesiva en el caso. Esto fue posible gracias a que la fiscal que dirige el proceso, **Eunice Mendizábal**, apeló contra la decisión de la jueza **Leticia Valenzuela** que previamente se había negado a admitir a la Comisión en el caso. Pero la CICIG no se ha contentado con entrar de lleno en el proceso contra **Portillo** sino que también ha solicitado antejuicio contra la jueza **Valenzuela**, a la que parecen haber identificado como parte de las estructuras de la impunidad.

La magistrada pertenece al Juzgado Quinto de Instancia Penal, un tribunal con un largo historial de resoluciones a favor de ex funcionarios del Frente Republicano Guatemalteco (FRG). **Valenzuela** ocupa el cargo de **Julio Jerónimo Xitumul**, el juez que dejó libre a **Portillo** con fianza de Q 1 millón y también al ex ministro de Finanzas **Manuel Maza Castellanos**.

Aunque la fiscalía especial de la CICIG no ha asumido la investigación, la reactivación del caso **Portillo** ha coincido con el inicio de un nuevo juicio contra el ex especialista del Ejército, **Alfredo Moreno Molina**, que fuera cabecilla de la *Red Moreno* o *Grupo Salvavidas*. **Moreno** pasó cinco años en prisión preventiva por un delito de evasión fiscal pero nunca fue condenado en firme y por ello fue liberado en 2001, al llegar **Portillo** a la presidencia. En la actualidad se le acusa de contrabando, la actividad en la que se especializó su red (Ver Cuadro).

A la fuga de **Salán** y **Rojas**, la CICIG ha tenido que sumar algunos otros reveses, que siguen mostrando las deficiencias del sistema. Así, pese a sus deseos, ninguno de los auxiliares del MP relacionados con **Matus** han podido ser encarcelados. Tampoco **Arévalo Lacs**. Lo elevado de la fianza impuesta, aventuraba que el militar no se librara de la prisión. Sin embargo, tras pasar unas horas en el preventivo de la Zona 18 fue trasladado al Centro Médico Militar por un “quebranto de su salud”.

## Dos visiones de la CICIG

**Idivina Hernández**, directora de Sedem

### ¿Hay malestar dentro del MP por la CICIG?

*Muchísima gente en diferentes fiscalías se siente amenazada porque ven cómo se están persiguiendo situaciones que ellos ven como normales pero que en realidad contravienen el debido proceso. Las últimas acciones de la CICIG han tenido mucha publicidad pero no son las únicas que han afectado intereses dentro del MP. Por ejemplo, hemos tenido conocimiento de que el personal de una fiscalía distrital completa ha sido destituido. De los 24 expedientes de expulsión que han finalizado con destitución, en los últimos meses, 18 corresponden a una sola fiscalía. Pero lo más positivo es que han sido destituciones irreversibles, como las que hicieron Marlene Blanco y Réंबर Larios en la PNC.*

### ¿Las detenciones de Matus y los auxiliares del MP son una forma de presionarlos para que den nombres de las estructuras para las que han trabajado?

*Me atrevería a decir que los auxiliares sólo siguieron órdenes. Pero la misma Constitución dice que nadie está obligado a acatar órdenes claramente ilegales. Y la forma en que procedieron ellos con la testigo, a la que ni siquiera le tomaron declaración pese a que se había requerido, era acatar una orden ilegal. Y era una orden de Alvaro Matus. La línea de investigación es con Matus y sus relaciones.*

### ¿A pesar de haber sido parte del MP en el mandato de Juan Luis Florido, el actual fiscal, Amílcar Velásquez, ha mejorado la gestión?

*Cuando asume Alvaro Colom decide destituir a Florido, basándose en las quejas del relator especial contra las ejecuciones extrajudiciales de las Naciones Unidas y en monitoreos de las organizaciones de Derechos Humanos. Entonces, se designa a Amílcar Velásquez que llega con un plan de actuación con un cierto respaldo de las organizaciones sociales. Además, también llega al Ministerio de Gobernación Francisco Jiménez y Marlene Blanco y Réंबर Larios, a la Policía. Casi se puede decir que se conformó un "dream team" en materia de reforma al sector Seguridad. Y además está, la CICIG. Durante la gestión de Florido, a la CICIG le fue imposible contar con fiscales que impulsasen su trabajo. Con Velásquez Zárate han tenido sus diferencias, pero en esencia, ha sido él el que ha abierto las puertas a la acción de la CICIG.*

### ¿Resolver los casos que la CICIG ha seleccionado puede ser clave para extirpar ciertas estructuras asentadas en el Estado?

*En el caso Matus hay posibilidad de avanzar hacia estructuras que funcionan en el Organismo Judicial y el sistema de Justicia. Creo que ese caso es estratégico. El de los nicaragüenses, junto con el del Parlacen, puede permitir avanzar sobre las estructuras que han funcionado en el MINGOB y la PNC. Aunque, desgraciadamente, bajo la conducción de Salvador Gándara estas estructuras se están recobrando. Lo que extrañamos es alguna acción pública que evidencie que la CICIG también esté trabajando en las estructuras vinculadas al aparato militar (al cierre de esta edición se confirmó que CICIG investiga el caso de las armas del Ejército que aparecieron en una bodega de narcos en Amatitlán)*

### El hecho de que se haya reactivado el caso Moreno precisamente ahora ¿es casual?

*No, es un caso que termina de ponerle la tapa al pomo a Alfonso Portillo. A Moreno es el gobierno de Portillo el que lo libera, supuestamente por la influencia de Francisco Ortega Menaldo, que fue quien colocó a Moreno en el Ministerio de Finanzas dentro del esquema de la acción contrainsurgente de la G2.*

### ¿Juzgar a Portillo tiene más probabilidades de éxito que investigar otros casos, como el de Rosenberg, que podrían tener implicaciones de sectores más poderosos?

*Los hechos contra Portillo están más que evidenciados y es el único espacio en el que hay algo de estructuras militares involucradas en la investigación de CICIG. En cuanto al resto de los casos, si aún no han accionado es porque están reuniendo pruebas y creando una opinión favorable para las acciones de la CICIG. No veo una prensa tan favorable a la CICIG como lo están siendo en el caso Portillo, si se procesase a alguien del Banco Industrial o del grupo Gutiérrez Bosch.*

**Luis Ramírez**, del Instituto de Estudios Comparados de Ciencias Penales (ICCPG)

### ¿La reacción dentro del MP responde a un deseo de encubrir a las estructuras de la impunidad o es una respuesta corporativista?

*Uno de los graves problemas de la administración de Justicia es el tema del corporativismo y la costumbre de cómo se hacen las cosas, o sea, que hay una tradición burocrática que genera corporativismo, falta de visión de servicio público. Y todo esto se solapa con seguir perpetuando impunidad para casos graves. Uno se pregunta ¿Por qué las tasas de impunidad son tan grandes? En realidad los casos que implican intereses políticos, de poder y que generan impunidad selectiva, no son tantos en relación a toda la conflictividad social, los casos de corrupción que hay en el país. La creación del MP en 1994 fue un cambio enorme; se introdujo un nuevo factor entre la policía y los jueces, pero el burocratismo existente se trasladó a la nueva institución, dirigir una investigación siguió siendo un ritual, no una actividad creativa. Si uno le pregunta a un fiscal si está de acuerdo con que haya un 98% de impunidad, puedo garantizar que muy pocos están de acuerdo. Pero todo tiene que ver con la relación entre burocracia e impunidad. "Tú no me dices nada y yo cubro mi sueldo a final de mes". Eso es una relación perversa. Se ha creado una subcultura burocrática en el MP: a nadie le interesa nada, se investigan los casos de forma aislada, si viene una víctima se le hace rellenar un formulario...*

### ¿La CICIG ha venido a alterar esas costumbres?

*Muchos fiscales actúan de forma cotidiana siguiendo determinados rituales pero por primera vez un fiscal general, el actual, tomó una decisión que nunca antes se había tomado: castigar a un fiscal por retrasar una investigación. Eso ha generado una reacción corporativa porque su burocratismo se ha puesto en cuestión, los fiscales se preguntan ¿Por qué si siempre lo hemos hecho así, ahora nos procesan por hacerlo? Y detrás de la burocracia funciona la impunidad de los casos graves, es la forma de no hacer funcionar la Justicia en los casos graves. Por eso es tan importante transformar los procesos en todos los casos, para que en los casos graves, florezcan las estructuras de la impunidad.*

### ¿Puede la CICIG eliminar la impunidad de manera estructural?

*Podrán desarticular tres o cuatro bandas clave y eso es muy importante, pero no acabar con el problema estructural. El gran problema es ¿Y después de la CICIG qué? Debe existir una policía de investigación criminal altamente profesional. Ningún país que no cuente con capacidad de investigación criminal puede averiguar casos. Nin-gu-no. Sólo hay tres niveles de personas que pueden ser castigadas por un sistema de Justicia que no tiene capacidad de investigación: por estereotipos de medios de comunicación –los mareros-, por crimen burdo y estúpido –como un marido que mata a su mujer en medio de la calle- y por pérdida de cobertura política –como ahora Portillo- Hay que ver más allá de la CICIG, la CICIG no va a resolver el problema de la impunidad en Guatemala*

### ¿El problema de la impunidad va más allá de los poderes ocultos?

*Una gran parte de la responsabilidad recae sobre la burocracia, sobre el habitus de la Justicia. La burocracia es como la neblina que nos impide detectar dónde están las estructuras de la impunidad. Quitemos la neblina, cambiemos el método de trabajo en el MP.*

### ¿La CICIG camina el camino inverso?

*Una de las cosas más importantes que podía haber impulsado la CICIG es la creación de una policía de investigación criminal. Y sobre ese tema no han dicho nada. Parece que no están interesados en procesos como la oralización de la Justicia que no es acabar con la impunidad pero sí es quitar la neblina.*

### Pero para hacer cambios en el sistema habrá que sacar primero a las personas que van a ser un obstáculo...

*Eso es mentira, el 80% de los casos que pasan por el sistema, no tienen nada que ver con esas estructuras*

Costa Rica y Panamá reticentes al PARLACEN

# Carencias en la integración regional empiezan a ser crónicas

*La historia de la integración centroamericana ha dejado hasta ahora tres herencias: una integración económica avanzada pero que no cumple sus expectativas de remolque del resto de procesos; una falta de operatividad política por el carácter no vinculante de las decisiones legislativas del Parlacen; y una ausencia de cohesión social que sigue sin legitimar el proceso institucional. Costa Rica continúa siendo el miembro díscolo, pero al que sus vecinos no dejan de mirar como modelo, mientras que el nuevo presidente de Panamá parece decidido a unirse a las críticas.*

---

POR MARTA NOCETE

---

Las recientes declaraciones del nuevo presidente de Panamá, **Ricardo Martinelli**, acerca de la posible salida de su país del Parlamento Centroamericano (Parlacen), han vuelto a poner de relieve las críticas a la inoperancia del órgano legislativo del Sistema de Integración Centroamericana (**SICA**). Además, en el último traspaso de la presidencia pro tunc del **SICA**, que Nicaragua entregaba a Costa Rica, el mandatario **Daniel Ortega** sacó a relucir que su vecino no se merecía dicha atribución ya que no muestra interés por el proceso de integración. **Oscar Arias**, presidente costarricense, no tuvo reparos en responder que si no acudía personalmente a todas las citas regionales era porque no se veían resultados específicos de tales encuentros.

Costa Rica ha sido uno de los miembros más críticos con el proceso de integración regional, y aunque se considera una de las democracias más sólidas del istmo y ha sido partícipe activo en los procesos de integración económica y social, no pertenece al Parlacen ni a la Corte Centroamericana de Justicia (**CCJ**), los pilares político y jurídico del sistema. Costa Rica celebrará, además, elecciones presidenciales en 2010, y los candidatos de los principales partidos, **Laura Chinchilla**, por el oficial Partido de Liberación Nacional, y **Ottón Solís**, por el Partido de Acción Ciudadana, están de acuerdo en continuar con la postura de la administración de **Arias** de no pasar a formar parte aun ni del Parlacen ni de la **CCJ**. Ambos líderes políticos siguen alegando que es necesario reformar dichos organismos y avanzar en otros pilares de la integración.

Panamá se suma, con la postura de su nuevo Gobierno, a Costa Rica como miembro crítico del **SICA** en lo que se perfila como una nueva etapa en el proceso de integración. Por un lado, el

Parlacen se encuentra en un momento determinante, ya que el año pasado se logró aprobar la reforma mediante la cual obtuvo sus facultades vinculantes, mediante las cuales sus decisiones serán de obligado cumplimiento para cada nación. Los presidentes de las repúblicas integrantes trabajan ahora para que las Asambleas Nacionales aprueben la nueva atribución (*Inforpress* 1742).

Además, el mandato que afronta el Parlacen, 2007-2008, ha coincidido con nuevos gobiernos nacionales en la región. Principalmente **Álvaro Colom** en Guatemala y **Mauricio Funes** en El Salvador, que han reforzado tanto a los grupos parlamentarios de izquierda como una visión de integración más progresista. Tradicionalmente han sido los presidentes de partidos de derecha los que han tenido una actitud más conservadora ante las propuestas de reformas para que el Parlacen pueda funcionar como un órgano supranacional (**Saca y Berger** en 2006) (*Inforpress* 1683).

Los países del istmo afrontan también retos ineludibles, como la finalización de la firma del Acuerdo de Asociación con la Unión Europea o las dificultades financieras y laborales derivadas de la crisis internacional.

Según **Guillermo Acuña**, sociólogo de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (**FLACSO**) de Costa Rica, “se está produciendo un reacomodo de los roles de los países de Centroamérica en el proceso de integración regional”. Para **Acuña**, Costa Rica ha venido formando parte de ese proceso, a pesar de sus críticas y de no pertenecer al Parlacen ni a la **CCJ**. Sin embargo, resalta su responsabilidad en otros órganos como el Sistema de Integración Social (**SISCA**) en el que Costa Rica realiza un aporte importante en el fortalecimiento de redes sociales.

**Gaspare Genna**, profesor en la facultad de Ciencias Políticas de Texas, sostiene la teoría de que en toda diná-

mica de integración aparece un país que lidera gran parte del proceso. Costa Rica, por su ausencia de conflictos internos, solidez institucional y estabilidad económica, es mencionada en ocasiones como posible líder regional. Sólo como ejemplo, en el reciente golpe de Estado en Honduras, **Manuel Zelaya** fue ubicado en San José, y no en otra capital de la región. **Acuña** asume el papel mediador e independiente que ha tenido Costa Rica a lo largo de la historia, pero no se muestra convencido con la aplicación de la teoría de **Genna** a Costa Rica, “hay que reconocer que la tendencia integracionista no está enquistada en Costa Rica”, matiza. Y ejemplifica que algunos de los avances más importantes, como la Unión Aduanera o la libertad de movilidad de personas por las fronteras, han sido liderados por miembros con economías más dinámicas como El Salvador o Guatemala.

Si bien desde **FLACSO** se apela a la relativa juventud de la institución (la primera Asamblea Plenaria fue en 1991) también detallan las críticas al mismo, “es necesario un remozamiento de las instituciones, una de las grandes cuestiones es si los diputados son elegidos con el suficiente rango de legitimidad”, comenta **Acuña**. Y añade que algunos matices culturales siguen siendo grandes, por ejemplo “en algunos países de la región los militares nunca se han ido”.

## Panamá con signos de desorientación

La posibilidad de abandonar el Parlacen planteada por **Martinelli** ha hecho temblar uno de los últimos pilares construidos en el istmo. Panamá, por su historia, no estuvo ligada a los primeros acuerdos de integración económica de las décadas de los 50 y 60, pero es miembro pleno desde la conformación del **SICA** en 1991. Sin embargo no le resultaría tan fácil abandonar el parlamento regional. **David Arce**, diputado del Parlacen por Cambio Democrático (**CD**) de Panamá, confirma a *Inforpress* que la salida no sería “de la noche a la mañana, ya que la unión al Parlacen está ratificada no sólo en la firma en Guatemala, sino ante instancias de la OEA y de la ONU (dentro de un proceso de preservación de la paz); tendría que pasar un periodo bastante largo para que nos retirásemos”. Sin embargo **Arce** considera la posibilidad de “suspender los pagos al Parlacen”. En ese caso, si un país deja de pagar la cuo-

ta anual, el sistema impone sanciones económicas por el incumplimiento del reglamento.

A pesar de estas afirmaciones, otros compañeros del Parlacen consultados, aseguran que el anuncio de retirada se trata de una promesa de campaña de **Martinelli** que responde a problemas de poder interno de los partidos panameños.

En marzo, el Tribunal Electoral (**TE**) retiró a los 13 aspirantes al Parlacen que presentó el partido de **Martinelli, CD**, alegando que “se violaron los estatutos del partido al no hacer primarias para estos cargos”. El **TE** decidió distribuir dichas curules entre el resto de partidos. Fue en ese momento cuando **Martinelli** declaró que nunca había “estado de acuerdo con los dineros que se malgastan en el Parlacen, no existe ningún beneficio”. Y planteó además que los magistrados muestran favoritismo por el **PRD**, el partido del expresidente **Martín Torrijos**.

En entrevista con *Inforpress*, **Miguel Bernal**, del Instituto de Estudios Políticos Internacionales de Panamá, sostuvo que “los gobiernos de la República, tras la invasión y la dictadura militar, no han querido, podido, ni sabido definir una política exterior, es improvisada por el gobierno de turno, y eso ha incidido en la dinámica de integración”. **Bernal** confirma las dudas hacia los órganos de integración, porque “los panameños no han visto beneficios, pero tampoco existe opinión pública sobre la importancia de la integración”. Señala que, en su opinión, las relaciones que más fortalecidas se han visto desde el inicio de la integración, han sido las militares, “enviando a estudiar a militares a otros países de la región e importando políticas en materia de compra y tráfico de armas”. Ni siquiera le concede fuerza a la integración comercial ya que afirma que Panamá ha seguido mirando más hacia el **TLC** con **EEUU** que hacia sus vecinos. “No veo en la clase política panameña un verdadero interés por la integración”, indica. Y finaliza aludiendo a las primeras reacciones del Gobierno ante la crisis política en Honduras, “se ha desentendido del golpe de Estado diciendo que es un problema que nunca debió salir y se debió resolver dentro”.

### Lapidaria historia

Nadie duda de los beneficios que la integración podría traer a la región, permitiéndole actuar como bloque en el Nuevo Orden Económico Internacional dominado por bloques y por megamercados. **Jorge Canda**, sociólogo y ex diplomático nicaragüense, escribió en 2003 que “en las negociaciones con los EEUU,... los centroamericanos han parecido cualquier cosa menos un bloque unido defendiendo los intereses comunes, lo cual ha sido aprovechado ventajosamente por el país del norte para explotar las diferencias intra centroamericanas”. Incluso

desde la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (**FUSADES**), se señaló el año pasado que “es importante dejar atrás la ideología que ha persistido en los países centroamericanos de ir solos cuando se puede y unidos cuando se necesita”.\*

Sin embargo **FUSADES** también hace referencia al problema de la inoperancia: “se debe reevaluar la forma de tomar decisiones por parte de los órganos supranacionales para decidir si se mantiene o no la dinámica de consenso, pues la experiencia ha demostrado que entorpece la conclusión de acuerdos”, y propone que se evalúe el sistema de toma de decisiones por mayoría cualificada. El propio **SICA** es consciente de que en la próxima etapa el reto será pasar de un proceso intergubernamental a uno comunitario.

**Jorge Villacorta**, diputado del Parlacen por el partido Cambio Democrático de El Salvador, está convencido de que el proceso de integración ha avanzado enormemente, aunque reconoce que la integración no institucional va por delante. “Los capitales se mueven, y las grandes empresas productoras están integradas, incluso el narcotráfico y el crimen organizado están integrados en la región”, señala **Villacorta**. Aunque matiza que la institucionalidad regional aún no está preparada para hacer frente a las fuertes demandas de la crisis, opina que quizás si sea el momento, con la crisis del sistema neoliberal, de darle el impulso que le hace falta a la integración.

Y es que hasta ahora el proceso de integración ha tenido dos grandes momentos de avance en su trayectoria, marcados por el contexto histórico. El primero fue en la década de los 60, cuando se crearon las instituciones formales, un trabajo eminentemente político propiciado por la homogeneidad de regímenes en la región que dio lugar al Mercado Común Centroamericano (**MCC**). Con el fin de la Segunda Guerra Mundial se recuperó la demanda de los mercados internacionales y Centroamérica conoció un crecimiento sin precedentes. **Edelberto Torres-Rivas** explica en su libro *La piel de Centroamérica* que el **MCC** señaló “el inicio de una industrialización que se quedó en una minoría de edad, a tono con la madurez de sus empresarios”. Y señala algo más, y es que en su opinión, “la concurrencia aleatoria de una generación de distinguidos economistas y políticos que creyeron en la integración regional, fue un factor humano difícil de repetir”.

El segundo momento determinante para la integración vino en los años 90, marcado por la consolidación de la paz y de los modelos democráticos en la región, por el fin del modelo agro exportador y por la inevitable entrada de

Centroamérica en las corrientes globalizadoras. Es lo que **Alex Segovia** denomina la integración real en su estudio *Integración Real y Grupos de poder en CA*, que en una primera etapa afectó al sector servicios y al comercio. Este impulso integracionista estuvo liderado por los grupos económicos nacionales, a los que sus países se les quedaron pequeños y pasaron a ser conglomerados regionales; y por las empresas transnacionales, que invirtieron masivamente en la región gracias a la apertura económica, y se integraron con las grandes empresas del istmo. Este hecho es considerado como la integración de facto, en la que las iniciativas individuales dieron lugar a que los empresarios y comerciantes fueran de los primeros y de los únicos beneficiados del proceso de integración.

Este es, actualmente, el gran fracaso de la integración económica, ya que no se ha cumplido la prometida teoría del desarrollo por “derrame” o “goteo” de las clases altas a las bajas. Si bien es cierto que durante la década de los 90 se produjo una modernización empresarial con aumento de la competitividad y el empleo, su consecuencia principal ha sido la concentración de la riqueza y del poder económico.

Esto ha debilitado al Estado y a los partidos políticos, así como a los actores sociales, clases medias y movimientos sindicales. Precisamente éstas son las preguntas o retos que plantea **Segovia** en su estudio: “¿Cómo institucionalizar la integración real y readecuarla para que contribuya al proceso de desarrollo? ¿Cómo seguir avanzando en el proceso de integración económica sin legitimar la exclusión económica, social y política?”

La base social sería el tercer pilar imprescindible que haría realidad una integración en Centroamérica. **Francisco de Gavidia** lo describía ya así en su publicación *El bien público* en 1893: “la unión no debe ser obra de los gobiernos, sino de los pueblos: fundemos asociaciones unionistas”. Y lo volvió a repetir **Aníbal Quiñonez**, secretario General del **SICA**, en diciembre de 2008 en el fin de su mandato, “la presencia de la sociedad civil en el aparato institucional es sumamente importante, no sólo por razones de participación democrática, sino por motivos de legitimidad”.

El diputado **Villacorta** reconoce la carencia señalando que “los pueblos no entienden la integración porque no hemos hecho el mínimo esfuerzo para que participen y le encuentren sentido”. Y continúa “si algo he aprendido en política es que las cosas no se mueven si no es con base en demandas y realidades, y no vamos a avanzar si los pueblos no demandan, no son suficientes los intereses empresariales”.

\***Claudia Beatriz Umaña**, directora del Departamento de Estudios Legales de **FUSADES**. “Integración Centroamericana: un proyecto en proceso de construcción”, 2008.

## GUATEMALA

### Cambios en el Organismo Ejecutivo

Ya sea por el estallido del caso Rosenberg, por la conformación de una nueva directiva en el partido oficialista que se dedique a preparar las próximas elecciones, o bien por la presión de la oposición, lo cierto es que en las últimas semanas se han sucedido varias destituciones y dimisiones en el gobierno de Álvaro Colom. El cambio de mayor rango fue el que afectó al Ministerio de Infraestructura y Comunicaciones. El titular de la cartera, Luis Alejos, presentó el pasado día 15 de junio su carta de renuncia argumentando problemas de salud que no le permitirían seguir con el cargo. La dimisión fue aceptada por el presidente Colom. Para suceder a Alejos se designó a su segundo al mando, el hasta entonces viceministro Guillermo Castillo Ruano que según explicó a la prensa local, llega al Ministerio con el propósito de limpiar la imagen de la institución. En las últimas semanas se habían producido varias denuncias públicas sobre malos manejos en el fondo para la reparación de carreteras COVIAL. La salida de Alejos, primo del secretario privado de la presidencia, Gustavo Alejos, y hermano del presidente del Congreso, Roberto Alejos, representa la pérdida de un miembro para el principal clan que rodea al actual gobernante. A los Alejos se les considera como financistas de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE). La de Alejos, no obstante, no fue la única salida de uno de los apoyos económicos del presidente. El director del Fondo Nacional para la Paz (FONAPAZ), Obdulio Solórzano, a quien también se identifica como financista del partido, renunció a su cargo para dedicarse exclusivamente a sus funciones como dirigente de la UNE. Su puesto fue ocupado por Jairo Flores que hasta el momento estaba al frente de la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia. Previamente Flores había ejercido diferentes responsabilidades en el Consejo de Cohesión Social, por lo que se le considera una persona de confianza de la primera dama, Sandra Torres. Los malos manejos en FONAPAZ también habían sido motivo de varias denuncias públicas.

## REGIÓN

### Medidas anti golpe

Varias han sido las medidas económicas que se han tomado a nivel regional e internacional como muestra de rechazo y presión a las nuevas autoridades instaladas en el Gobierno de Honduras. De un lado, los presidentes del Banco Mundial, Robert Zoellick, y del Banco Interamericano de Desarrollo, Luis Alberto Moreno, anunciaron el martes día 30 que ambos organismos congelaron todos los programas de préstamos que mantenían con Honduras, para trabajar en coordinación con la Organización de Estados Americanos en el manejo de la crisis. Honduras se beneficia de un fondo del BM que otorga préstamos a bajo costo y donaciones a los países pobres, y Zoellick detalló que la asignación para Honduras el próximo año fiscal era cercana a US \$80 millones. Las condiciones bajo las que el BM reestablecería los créditos aún no han sido confirmadas y dependerían de la situación. Por su parte, Moreno aseguró que por el momento el organismo ha detenido toda actividad de crédito y desembolso a Honduras y que sus decisiones también dependerán de lo que haga la OEA. En cuanto a las medidas a nivel regional, los presidentes Mauricio Funes, de El Salvador, Álvaro Colom de Guatemala y Daniel Ortega de Nicaragua, decidieron el mismo día 30 en sesión extraordinaria del SICA realizar un bloqueo comercial y por consiguiente, un cierre de fronteras con Honduras, durante 48 horas, en rechazo a la expulsión de Manuel Zelaya. Las cámaras de comercio y asociaciones de empresas privadas mostraron su inconformidad con la medida argumentando que ésta violaba el libre tránsito de mercancías garantizado en los tratados de integración. Una vez transcurrido el plazo de 48 horas el comercio terrestre volvió a su normalidad y algunas entidades evaluaron pérdidas. Guatemala y El Salvador estimaron su comercio diario con Honduras en unos US \$2 millones diarios, por lo que las pérdidas rondarían los US \$4 millones en total para cada país. La medida afectó no sólo a los mercados de la región sino también a EEUU y a Europa. (Sigue...)

## EL SALVADOR

### Grupo Agrisal se expande

El grupo transnacional Intercontinental Hotels llegó, a mediados de junio, a un acuerdo con el grupo salvadoreño Agrisal para la construcción de siete hoteles en la región que operarán bajo la marca Intercontinental. Agrisal, conglomerado empresarial presidido por Roberto Murray Meza, ya cuenta en la actualidad con un hotel de la citada cadena en San Salvador. Sin embargo, esta alianza llegará al grupo a construir hoteles en Antigua Guatemala, Escazú (Costa Rica), San Pedro Sula y Tegucigalpa (Honduras), así como en Managua (Nicaragua). La operación implicará la inversión de al menos US\$ 70 millones. Tras la venta de su negocio tradicional, la elaboración de cerveza, la familia Meza se ha dedicado, sobre todo, al sector inmobiliario y la construcción. Participaron, por ejemplo, en la construcción del Puerto de Cutuco.

## REGIÓN (Continuación)

### Medidas...

La Cámara de Comercio nicaragüense dijo que su mercado sería el más afectado ya que sus exportaciones (46%) e importaciones (30%) pasan obligatoriamente por Puerto Cortés, en el Atlántico hondureño, al carecer Nicaragua de infraestructuras en esa costa. El Consejo Hondureño de la Empresa Privada en Honduras aún no había calculado pérdidas nacionales pero estimó pérdidas a nivel regional por más de US \$20 millones. Otra de las consecuencias del golpe de Estado ha sido la suspensión de la VIII Ronda de Negociaciones del Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea, que se iba a celebrar en Bruselas la segunda semana de julio. Se suponía que era la última ronda de negociación antes de cerrar el acuerdo, pero las expectativas no eran tan optimistas ya que aún quedan negociaciones del pilar económico sin concluir. La suspensión se produce de manera definitiva hasta la estabilización de Honduras, según declaró la viceministra de Comercio Exterior de Costa Rica, Amparo Pacheco.

#### DE NUESTRAS PUBLICACIONES

*Por su ubicación geográfica, Centroamérica adquiere cada vez más importancia geopolítica. Siga de cerca los cambios que se están dando en el istmo*

**SUSCRÍBASE A INFORPRESS CENTROAMERICANA**  
 suscripciones@inforpressca.com  
 Teléfono: 2473-1704

#### TASA DE CAMBIO PARA US DÓLAR

País	Moneda	Tasa Actual	Hace 6 meses
GUA	Quetzal	8.16	7.81
HON	Lempira	18.89	18.88
NIC	Córdoba	20.33	19.87
CR	Colón	570.75	563.50
ES	Dólar	1.00	1.00
MEX	Peso	13.16	13.49
CAN	Dólar	1.16	1.18
UK	Libra	0.60	0.66
BEL	Dólar	1.95	1.96
UE	Euro	0.71	0.73

El Salvador y Panamá circulan dólares estadounidenses.

#### PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN (EN US\$)

Al 02/07	Café	Petróleo	Azúcar
JUL '09	117.55	-----	16.65
DIC '09	123.05	70.16	-----
MAR '10	125.85	71.51	18.65